



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veinte (2020)

RADICADO: 11001-33-35-026-2019-00524-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES
DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En el presente asunto, se observa que el señor **CESAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES** promovió demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, con el objeto de obtener la nulidad del oficio No. 20183000651-STH-30100 de 17 de enero de 2018 y resolución No. 0000922 del 4 de julio de 2018, por medio de los cuales niega una comisión especial y la solicitud de una revocatoria directa.

El presente asunto fue radicado inicialmente ante el Consejo de Estado, por ser un proceso que carece de cuantía, el día 16 de julio de 2018, tal y como consta a folio 76 reverso del expediente.

Al respecto, y mediante providencia de fecha 1º de agosto de 2019¹, el Consejero Ponente Doctor Rafael Francisco Suarez Vargas, señaló que el presente asunto si tiene contenido económico, habida consideración que, al acceder a la pretensiones de conceder la comisión de servicios solicitada, surgiría el pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales Municipales y el de Director Administrativo y Financiero del Centro de Memoria Histórica.

De acuerdo con lo anterior, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró en el Título V, todos los aspectos relacionados con los

¹ Folios 79-81

presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción.

Concretamente, el Capítulo III de la norma ibídem, en el artículo 162², consagra los requisitos que deben reunir las demandas.

Pues bien, al analizar la norma antes señalada y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

1. Del restablecimiento del Derecho

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 138 del CPACA, el Profesional del Derecho quien actúa en nombre propio, deberá adecuar la demanda al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de conformidad con lo señalado por el H. Consejo de Estado en providencia de data 1º de agosto de 2018, por lo que deberá cumplir con este requisito y solicitar el restablecimiento del derecho directamente violado por la parte demandada.

2. De la estimación razonada de la cuantía.

Ahora bien, el artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral.³

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo legal mensual vigente aprobado por el Gobierno Nacional es de \$781.242, luego entonces, al realizar la operación matemática, tenemos que los 50 S.M.L.M.V. determinados en la norma precitada, equivalen a la suma de \$39.062.100.00.

De acuerdo con lo anterior, el demandante deberá razonar de manera adecuada la cuantía, calculándose la misma desde cuando se causaron los

“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.

³ **“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

derechos y hasta la presentación de la demanda **sin que supere los tres años, y sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

Lo anterior, teniendo en cuenta que estamos frente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no de simple nulidad como lo pretendía el demandante al inicio del presente proceso ante el Consejo de Estado.

3. De la demanda y sus anexos en el medio magnético

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del C.P.A.C.A., y el artículo 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, es menester que **la demanda y los anexos de la misma se encuentren integrados al expediente en físico y en medio magnético**, con el fin de surtir las notificaciones personales a la Entidad demandada, al Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y por ello se deberá cumplir a cabalidad con este requisito.

Lo anterior, por cuanto una vez revisada la demanda junto con los traslados, no se encuentra incorporado los actos acusados y que son objeto de Litis, así como los demás anexos de la demanda, por lo que es **importante** que la parte actora, aporte de manera completa los actos acusados tanto en el medio magnético como en los traslados de la demanda, teniendo en cuenta que el archivo que se envía a través del correo electrónico de notificaciones judiciales al momento de la notificación del auto admisorio de la demanda, **debe** estar completo. Igualmente los traslados de la demanda deben contener los actos acusados pues los mismos se envían a través de correo certificado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 166 del CPACA, en concordancia con el artículo 612 del CGP.

De la misma manera, deberá adecuar el destinatario para el conocimiento de la presente demanda, teniendo en cuenta que inicialmente fue radicada ante el Consejo de Estado, y posteriormente fue remitida a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.

4. De las normas violadas y concepto de violación

Se deben señalar las normas que se estiman violadas con los actos acusados, explicando el concepto de la violación sobre cada una de las mismas, y la forma en la cual se considera que el acto administrativo las ha vulnerado, ello para cumplir el numeral 4° del artículo 162 del C.P.A.C.A.

Lo anterior, por cuanto el demandante señala como normas infringidas normas constitucionales y legales, sin exponer el concepto de violación de cada una de ellas.

5. Del trámite de la conciliación prejudicial

De conformidad con el art. 161 del C.P.A.C.A., en los asuntos que son conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, por tal razón, se deberá dar cumplimiento a tal previsión, allegando las constancias que comprueben que se agotó la conciliación señalada, si es necesaria para el presente asunto.

Lo anterior, en razón a que, la parte actora aporta únicamente la constancia de notificación de la audiencia de conciliación llevada a cabo el día 4 de julio de 2018, sin embargo, no adjunta la totalidad del acta de conciliación con la constancia de fallida, por lo que deberá el Profesional del Derecho aportar de manera completa el acta de conciliación llevada a cabo ante la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado.

Por consiguiente la demanda presentada por la apoderada judicial de la actora, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011 y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En consecuencia, el Despacho,


RESUELVE

PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA promovida por el señor **CESAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES** en contra de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

IV



JUZGADO VEINTISEÍS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **28 DE ENERO DE 2020**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)


LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA